



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

RESOLUCIÓN

Exp.: 053/2022

Archivo de actuaciones

Fecha entrada: 20/10/2022

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 20 de octubre de 2022 tuvo entrada en el Registro general del Consejo General del Poder Judicial una reclamación, formalizada en el "formulario de atención ciudadana", de AAA frente a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de XXX, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Publicación de la sentencia Nº de rollo: 0000719/2022; se ha publicado esta sentencia completa, con mi nombre y apellido en un periódico digital, envío acceso para su comprobación: <https://222...> No tengo idea de si se puede o no publicar estos datos y si el ministerio publico o la propia sala que dicta la sentencia deberían velar por la protección de los datos, al margen de todo lo demás, que sigue su camino hasta y que por tanto no es definitiva".

El reclamante aporta copia de la sentencia dictada por el referido órgano judicial en fecha 23 de septiembre de 2022 y extracto de la noticia publicada en el Diario YYY. La sentencia fue dictada en el recurso de apelación interpuesto por el reclamante frente a la dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 2 de ZZZ, con sede en DDD, en un procedimiento abreviado en el que fue encausado y condenado el reclamante. En la sentencia aportada se refleja tal condición procesal, así como el nombre y apellidos del reclamante y su relación con los hechos enjuiciados, referentes a la presentación de cuentas de una empresa pública.

Segundo.- Mediante comunicación del Director de Supervisión y Control de Protección de Datos del Consejo General del Poder Judicial de fecha 27 de octubre de 2022 se acusó recibo al reclamante, solicitándose en esa misma fecha a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de XXX información sobre los hechos obrantes en la reclamación. El día 11 de noviembre de 2022 tiene entrada en el Registro general de este Consejo el



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

informe suscrito por la Letrada de la Administración de Justicia del referido órgano judicial, en el que se señala lo siguiente:

"1.- Por este Órgano Judicial únicamente se notificó la Sentencia que resuelve dicha apelación a los Procuradores personados en la causa (apelantes) y al Ministerio Fiscal (que aparece como parte apelada) vía Lexnet, el mismo día de su dictado.

2.- Asimismo se remitió telemáticamente la resolución al Juzgado de lo Penal Nº 2 de DDD (órgano que dictó la sentencia en primera instancia) sin que, a día de la fecha, conste su aceptación por dicho Órgano (lo que significa que no se ha colgado en su procedimiento sin que pueda por tanto visualizarla), dado que no se le han devuelto las actuaciones pues se ha interpuesto recurso de casación, constando oficio de remisión al Tribunal Supremo de fecha 21 de octubre de 2022.

3.- Por otro lado, comprobado el correo electrónico, puedo afirmar que la Sentencia en cuestión no se envió al gabinete de prensa adscrito al Tribunal Superior de Justicia de YYY. No obstante quiero dejar constancia aquí que, pese a la obligación que tienen los gabinetes de prensa adscritos a los órganos judiciales de anonimizar las resoluciones que se le entregan, esta Letrada SIEMPRE las anonimiza antes de enviárselas, lo que se puede corroborar con los responsables del gabinete en YYY..

4.- Desde que me incorporé a este Órgano Judicial en octubre de 2018 he dado instrucciones claras a todo el personal en materia de protección de datos de carácter personal, pudiendo afirmar que este órgano es muy escrupuloso en dicha materia, no dándose ninguna información de las actuaciones a nadie que no sea parte en el procedimiento y, respecto a la entrega de copias a las partes, se solicita primero una justificación de la petición no entregándose si no se considera justificado o si la misma pudiera vulnerar la protección de datos de carácter personal de cualquier interviniente (caso de informes médicos), lo que ha supuesto más de un recurso, habiendo llegado incluso al propio Consejo General del Poder Judicial por recurso del jefe de prensa del TSJ de YYY (recurso núm. NNN/2019 resuelto por acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ en su reunión de DD/MM/2019)".

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Los tratamientos de datos personales que se realizan en el curso de los procedimientos judiciales se rigen por la normativa de protección de datos. Así se desprende inequívocamente de los preceptos que se señalan a continuación: i) artículo 2, apartado 4, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: "[e]l tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales de los procesos de que sean competentes, así como el realizado dentro de la Oficina Judicial, se registrarán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

Poder Judicial, que le sean aplicables”; y ii) artículo 236 ter, apartado 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción dada por la disposición final tercera de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales: “[e]l tratamiento de los datos personales llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales y fiscalías de los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina judicial y fiscal, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, la Ley Orgánica 3/2018 y su normativa de desarrollo, sin perjuicio de las especialidades establecidas en el presente Capítulo y en las leyes procesales”. Igualmente da nueva redacción la referida Ley Orgánica 7/2021 al artículo 236 octies de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo apartado primero establece las funciones que corresponden al Consejo General del Poder Judicial respecto a las operaciones de tratamiento efectuadas con fines jurisdiccionales por los Juzgados y Tribunales y las Oficinas judiciales, entre las que se encuentran la supervisión del cumplimiento de la normativa de protección de datos personales mediante el ejercicio de la labor inspectora (letra a) y la tramitación de las reclamaciones interpuestas por los interesados, informándose al reclamante sobre el curso y resultado de la reclamación en un plazo razonable, previa realización de la investigación oportuna si se considera necesario (letra e).

Segundo.- La competencia del Consejo General del Poder Judicial en materia de protección de datos personales se ejerce, por tanto, respecto de los tratamientos de datos personales efectuados con fines jurisdiccionales, cuya caracterización se recoge en el apartado primero del artículo 236 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a cuyo tenor “[t]endrá fines jurisdiccionales el tratamiento de los datos que se encuentren incorporados a los procesos que tengan por finalidad el ejercicio de la actividad jurisdiccional”.

Con arreglo a lo previsto en el artículo 236 nonies LOPJ, en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 7/2021, las competencias que de acuerdo con lo establecido en el artículo 236 octies corresponden a la autoridad de protección de datos personales con fines jurisdiccionales serán ejercidas, respecto del tratamiento de los datos realizados por Juzgados y Tribunales, por la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del Consejo General del Poder Judicial.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

Tercero.- La reclamación se refiere a tratamientos de datos producidos con ocasión de la tramitación de un procedimiento penal. En este sentido debe tenerse presente que los tratamientos que se sitúan en el ámbito de la investigación y enjuiciamiento de las infracciones penales se rigen por la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. Según se indica en su disposición final undécima, "*[m]ediante esta Ley Orgánica se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2016/689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo*".

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2, de la Ley Orgánica 7/2021, "*[e]l tratamiento de los datos personales llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales y fiscalías de las actuaciones o procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina judicial y fiscal, en el ámbito del artículo 1, se regirá por lo dispuesto en la presente Ley Orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, las leyes procesales que le sean aplicables y, en su caso, por la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Las autoridades de protección de datos a las que se refiere el capítulo VI [la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos] no serán competentes para controlar estas operaciones de tratamiento*".

Por último, en cuanto a este punto, el apartado 2 del artículo 236 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que "*[e]n el ámbito de la jurisdicción penal, el tratamiento de los datos personales llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales y fiscalías de los procesos, diligencias o expedientes de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina judicial y fiscal, se regirá por lo dispuesto*



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

en la Ley Orgánica de protección de datos personales tratados con fines de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, sin perjuicio de las especialidades establecidas en el presente Capítulo y en las leyes procesales y, en su caso, por la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal”.

Cuarto.- Los hechos denunciados en el presente expediente se refieren a la posible difusión indebida de datos personales del reclamante, parte en un procedimiento judicial, con ocasión de la publicación de una sentencia sin anonimizar en prensa digital. Se dan, por tanto, los elementos caracterizadores de los tratamientos de datos con fines jurisdiccionales, siendo competente para su conocimiento el Consejo General del Poder Judicial.

Quinto.- Con arreglo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Orgánica 3/2018, la Agencia Española de Protección de Datos *“inadmitirá las reclamaciones presentadas cuando no versen sobre cuestiones de protección de datos de carácter personal, carezcan manifiestamente de fundamento, sean abusivas o no aporten indicios racionales de la existencia de una infracción”.*

En el marco de las funciones que, con arreglo a lo dispuesto en el citado artículo 236 nonies, apartado primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial tiene atribuidas como autoridad de control, le corresponde pronunciarse sobre la admisibilidad a trámite de la reclamación formulada. En este sentido, no apreciando la concurrencia de ninguna de las causas de inadmisión establecidas en el artículo 65.2 de la Ley Orgánica 3/2018, y en el desarrollo de las actuaciones previas de investigación a que se refiere el artículo 67 de la misma, se ha recabado información al órgano judicial a que se refiere la reclamación planteada respecto de los hechos puestos de manifiesto en la misma.

Sexto.- Como se señalaba en el fundamento jurídico primero, los tratamientos de datos que se realizan en el curso de los procedimientos judiciales se rigen por la normativa de protección de datos. Los preceptos transcritos en dicho fundamento jurídico disponen, por otra parte, que, junto a la normativa general de protección de datos personales, los tratamientos



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

de datos que tienen lugar en la tramitación de los procesos se rigen asimismo por las leyes procesales y la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece en su Capítulo I bis del Título III del Libro III (artículos 236 bis a 236 decies) determinadas particularidades en esta materia. La posibilidad de que estos tratamientos se rijan por previsiones específicas está contemplada en el propio Reglamento general de protección de datos, cuyo Considerando (20) reza como sigue: *"Aunque el presente Reglamento se aplica, entre otras, a las actividades de los tribunales y otras autoridades judiciales, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros pueden especificarse las operaciones de tratamiento y los procedimientos de tratamiento en relación con el tratamiento de datos personales por los tribunales y otras autoridades judiciales. A fin de preservar la independencia del poder judicial en el desempeño de sus funciones, incluida la toma de decisiones, la competencia de las autoridades de control no debe abarcar el tratamiento de datos personales cuando los tribunales actúen en ejercicio de su función judicial. El control de esas operaciones de tratamiento de datos ha de poder encomendarse a organismos específicos establecidos dentro del sistema judicial del Estado miembro, los cuales deben, en particular, garantizar el cumplimiento de las normas del presente Reglamento, concienciar más a los miembros del poder judicial acerca de sus obligaciones en virtud de este y atender las reclamaciones en relación con tales operaciones de tratamiento de datos"*.

Del referido contexto normativo se desprende que corresponde al Consejo General del Poder Judicial, como Autoridad de control en los tratamientos de datos con fines jurisdiccionales, supervisar el cumplimiento de -entre otras- las normas del Reglamento general de protección de datos en lo que se refiere a dichos tratamientos. Entre dichas normas se encuentran, desde luego, las relativas a la necesaria atención de los principios por los que deben regirse los tratamientos de datos personales. Uno de tales principios es el de "integridad y confidencialidad" de los datos, el cual es contemplado en el artículo 5 del Reglamento general de protección de datos (RGPD) en los siguientes términos: *"1. Los datos personales serán: ... f) tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas y organizativas apropiadas"*.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

El apartado 2 de este mismo artículo 5 establece que *"[e]l responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 y capaz de demostrarlo («responsabilidad proactiva»)".* Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24.1 RGPD, y en virtud de las obligaciones que comporta el principio de responsabilidad proactiva del responsable del tratamiento, *"[t]eniendo en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el presente Reglamento. Dichas medidas se revisarán y actualizarán cuando sea necesario".*

Con arreglo a lo prevenido en el artículo 236 bis, apartado 2, de la ley Orgánica del Poder Judicial *"[e]l tratamiento de los datos personales en la Administración de Justicia se llevará a cabo por el órgano competente y, dentro de él, por quien tenga la competencia atribuida por la normativa vigente".*

En anteriores resoluciones adoptadas por el Consejo General del Poder Judicial en materia de protección de datos se ha señalado reiteradamente que no le corresponde, en su condición de autoridad de control, pronunciarse sobre la adecuación de las actuaciones procesales a la normativa procesal por las que se rigen, salvo que por las circunstancias en que dichas actuaciones tengan lugar se desprenda algún indicio de posible vulneración de la normativa de protección de datos, lo que no ocurre en el presente caso. De las actuaciones practicadas en el expediente resulta que las medidas adoptadas por el responsable del tratamiento (el órgano jurisdiccional u Oficina judicial ante el que se tramita el proceso en el que se han tratado los datos a que se refiere la reclamación) habrían permitido asegurar debidamente el cumplimiento del principio de confidencialidad contemplado en el artículo 5 RGPD respecto de los datos personales del reclamante, toda vez que la notificación de la sentencia donde obran esos datos personales se realizó vía Lexnet a los procuradores personados en la causa como apelantes y al Ministerio Fiscal como parte apelada, remitiéndose asimismo telemáticamente al órgano que dictó la sentencia en primera instancia, el cual no habría procedido siquiera a visualizar la sentencia y a incorporarla a su procedimiento por las circunstancias que se señalan en el informe emitido en



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

las presentes actuaciones. En dicho informe se señala, además, que dicha sentencia no fue enviada al gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, lo cual, por otra parte, de haberse producido, habría tenido lugar en condiciones de anonimización, por ser este el criterio que se utiliza siempre en las remisiones de las resoluciones judiciales al indicado gabinete de prensa. Ningún indicio de vulneración de la normativa de protección de datos cabe advertir, por tanto, en la actuación del órgano judicial en la difusión de la sentencia a que se refiere la reclamación.

Séptimo.- Igualmente ha señalado el Consejo General del Poder Judicial en anteriores resoluciones que la normativa de protección de datos personales, respecto de los datos que obran en los procedimientos judiciales, no concierne solamente a los órganos judiciales y a quienes prestan servicio en los mismos, sino que se extiende a las partes del procedimiento y a todos aquellos que ostentan la representación procesal y la defensa de las partes y otros posibles intervinientes en el procedimiento (testigos, peritos, etc.). Así se reconoce expresamente en el apartado 3 del artículo 236 quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial: *"[l]os datos personales que las partes conocen a través del proceso deberán ser tratados por éstas de conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación también incumbe a los profesionales que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento"*.

Habiendo rebatido el informe del órgano judicial la posible difusión indebida de datos obrantes en el procedimiento que pudiera tener origen en la notificación de la sentencia por parte de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de XXX, no se advierten otras posibles actuaciones de investigación que pudieran tener acomodo en las funciones del Consejo General del Poder Judicial como autoridad de protección de datos. En este sentido, debe tomarse en consideración que cualquier difusión de datos que pudiera provenir de las partes del procedimiento, o de sus representantes procesales o de quienes les asisten, así como de cualquier otro posible interviniente en el mismo, a los que se hubiera accedido en el proceso, en la medida en que se realice *ad extra* y al margen del proceso, no puede ser considerada como *tratamiento con fines jurisdiccionales* en los términos en que éstos son configurados en el artículo 236, apartado 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En definitiva, en estos casos, cualquiera que sea la finalidad de ese concreto tratamiento de los datos incorporados al proceso a los que se ha



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

tenido acceso, es claro que dicha finalidad no es el ejercicio de la actividad jurisdiccional.

Octavo.- Habiendo quedado delimitados los hechos denunciados en la reclamación presentada y en el informe del órgano judicial, no procede llevar a cabo ulteriores actuaciones de investigación en relación con los mismos, debiéndose decretar el archivo de las actuaciones del presente expediente por no advertirse ningún indicio de vulneración de la normativa de protección de datos personales en los tratamientos realizados por el órgano judicial.

Por lo expuesto,

ACUERDO

1.- Archivar las actuaciones previas practicadas a raíz de la reclamación formulada por AAA frente a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de XXX, registrada con el número de expediente 053/2022.

2.- Notificar la presente resolución a AAA y a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de XXX.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante esta Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación del presente acto, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Firmado digitalmente
José Luis Gisbert Iñesta
Director de Supervisión y Control de
Protección de Datos (e.f.)